

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	1142
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2019-00121-00
MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO SINGULAR
EJECUTANTE:	ENRIQUE ALBERTO CÁRDENAS GUALTEROS
EJECUTADA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO:	Desestima recurso de reposición y niega concesión recurso de apelación

Bogotá, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Surtido el traslado previsto en el artículo 319 del CGP, se procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada contra el auto interlocutorio No. 582 del 12 de agosto de 2020, mediante el cual se libró mandamiento de pago a favor del ejecutante y en contra de la ejecutada (fls. 94 a 97).

La parte recurrente fundó su inconformidad en el numeral 5 del artículo 100 del CGP y alegó que la demanda no reúne los requisitos formales, por las siguientes razones: (i) la obligación perseguida no es expresa ni exigible porque no está contenida en la sentencia que sirve de título ejecutivo, pues lo que se ordenó en ella fue el descuento de los aportes a cargo del trabajador; (ii) la sentencia no faculta al demandante para cobrar los aportes reclamados, pues la legitimada para hacerlo es la UGPP por ser la acreedora de esa obligación y la titular de esa potestad, de manera que se desatendió el requisito de literalidad del título; y (iii) la ilegalidad de la fórmula actuarial dispuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para liquidar los aportes no debe discutirse ni definirse en el juicio ejecutivo sino en el proceso ordinario (fls. 124 a 127).

Pues bien, se recuerda que los artículos 430, inciso 2, y 442, regla 3ª, del CGP prevén: (i) los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante la interposición del recurso de reposición contra el mandamiento de pago y, por ende, no se admite ninguna controversia sobre tales requisitos que no haya sido planteada por medio de dicho medio de impugnación; (ii) los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso; y (iii) los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante la interposición del recurso de reposición contra el mandamiento de pago.

En cuanto a las exigencias formales y a los requisitos sustanciales del título ejecutivo, están regulados en los artículos 215 y 297 del CPACA y 114 y 422 del CGP. Veamos:

*"Art. 215.- La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley".*

*"Art. 297.- Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:*

*Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias (...)"*

**"Art. 114.- (...)** 2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria".

**"Art. 422.- Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial (...)"**.

El Consejo de Estado<sup>1</sup> hizo la distinción entre los requisitos sustanciales y formales del título ejecutivo, de la siguiente manera:

*"La distinción entre las condiciones formales y materiales o sustantivas del título ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de la Sección Tercera. En el auto del 31 de enero de 2008 - Exp. 34.201- sostuvo que las condiciones o requisitos formales del título ejecutivo consisten en el hecho de que el documento -si es uno simple, como el título valor- o los documentos -si se trata de uno complejo- sean auténticos y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por una autoridad judicial, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado -aun cuando esta fuente no está prevista expresamente en el artículo 488 del CPC-, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva. Por su parte las condiciones o exigencias sustantivas se circunscriben a las señaladas antes: exigibilidad, claridad y expresividad:*

*'Reiteradamente, la jurisprudencia ha señalado que los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales. Las formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado o de otra providencia judicial que tuviere fuerza ejecutiva conforme a la ley.*

*Las condiciones sustanciales se traducen en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles. Frente a estas calificaciones, ha señalado la doctrina, que por expresa debe entenderse cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el documento que la contiene debe ser nítido el crédito-deuda que allí aparece; tiene que estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a lucubraciones o suposiciones. 'Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico-jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta'. La obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido. La obligación es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición (...)"*.

Y en cuanto a las excepciones de mérito que proceden frente a una sentencia de condena que sirve de título ejecutivo, es pertinente indicar que están enlistadas en el artículo 442 del CGP. Obsérvese:

**"Art. 442.- La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:**

**(...) 2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida (...)"**.

De los preceptos legales y la jurisprudencia citados se colige que el recurso de reposición formulado por la parte ejecutada contra el mandamiento de pago por no reunir el título ejecutivo los requisitos formales, sólo puede ser interpuesto para controvertir los siguientes aspectos: **(a)** que los documentos no son auténticos; **(b)** que los documentos que integran el título ejecutivo no conforman una unidad jurídica; **(c)** que los documentos no emanen del

<sup>1</sup> Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera, sentencia de mayo 14 de 2014 Rad.: 25000-23-26-000-1999-02657-02 (33.586) C.P: Enrique Gil Botero. Ver también la sentencia del 8 de junio de 2016, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 27001-23-31-000-2012-00086-01(47539).

deudor o de su causante, ni de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción ni de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley; y (d) que los hechos alegados configuran excepciones previas.

Por consiguiente, podría concluirse que el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada devendría improcedente, habida cuenta que las controversias suscitadas por ese medio impugnativo involucran reparos a los requisitos sustanciales y no a las exigencias formales del título ejecutivo, en la medida en que adujo que la obligación cobrada no es expresa ni exigible porque no está contenida en la sentencia que sirve de título, con lo cual se desatendió la literalidad como uno de sus rasgos esenciales; que el ejecutante no es el acreedor sino el deudor de la obligación perseguida, dado que la titular de la acreencia es la UGPP, y por ende no está legitimado para cobrarla; y que la inconformidad del actor con la aplicación de la fórmula empleada por la parte ejecutada para liquidar los aportes a pensión debe alegarse en el proceso declarativo y no en el de ejecución; de suerte que, en principio, a la entidad demandada le incumbía alegarlos a través de las excepciones de mérito, como en efecto lo hizo con la contestación de la demanda (fls. 128 a 135), y al juez dirimir las en la sentencia.

No obstante, dada la restricción expresa que en materia de excepciones de mérito impone la ley para invocarlas frente a una sentencia de condena que sirve de título ejecutivo y con el fin de no sacrificar el derecho de contradicción y defensa de la parte ejecutada, dada la dificultad que en ciertos casos, como éste, representa distinguir los requisitos sustanciales y formales, pues unos y otros, por sus diferencias tenues, a veces se confunden o trastocan, el juzgado estudiará y resolverá en esta oportunidad el segundo y tercero de tales reparos, esto es, que el título ejecutivo no proviene del deudor, toda vez que la parte ejecutada no ostenta esa condición, sino la de acreedora, por ser la titular y legitimada para cobrar los aportes a pensión que por ley corresponde cotizar al trabajador y, de otro lado, que el juicio ejecutivo no es el ámbito procesal adecuado para objetar la fórmula en la cual se apoyó la UGPP para liquidar los aportes a pensión cuyo descuento en exceso ataca el actor, pues en cuanto al primer reparo, relativo a la falta de exigibilidad del título ejecutivo por desatender su literalidad, se dirimirá en la sentencia que decida las excepciones de mérito o, mejor, se volverá eventualmente sobre este aspecto en ese acto de decisión.

En efecto, las sentencias objeto de ejecución ordenaron la reliquidación de la pensión de vejez del demandante con la inclusión de los factores salariales adicionales devengados en el último año de servicios, esto es, sueldo básico, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, y dispusieron que sobre las nuevas partidas se efectuarían los descuentos que por aportes a pensión le correspondía cotizar al trabajador en el porcentaje indicado en la ley y atendiendo el fenómeno extintivo de la prescripción trienal, lo que en efecto hizo la UGPP en el acto administrativo de cumplimiento de las aludidas providencias, sólo que en un monto superior al previsto en la normatividad vigente en el período en el cual percibió tales emolumentos (1999 a 2002), lo cual significa que la orden de pago librada a favor del actor en el mandamiento ejecutivo no corresponde propiamente al cobro del valor de tales cotizaciones, como lo aduce erróneamente la UGPP, y de cuya obligación no se discute la titularidad de ésta, sino a las diferencias pensionales ordenadas en las referidas sentencias que le dejó de cancelar al actor por haberle deducido una suma superior a la que estaba obligado a cotizar por aportes a pensión.

Ejemplificando lo pretendido en la demanda ejecutiva, se podría decir que el descuento en exceso de los aportes a pensión le causó al actor una merma en el pago de las diferencias pensionales a las que fue condenada la UGPP, por lo que el cobro compulsivo formulado por el actor se contrae al pago del valor de tal faltante del reajuste pensional reconocido judicialmente y no a la cancelación del monto de la cotización deducida, como lo pretende tergiversar la parte impugnante, de suerte que el ejecutante es el titular de la obligación pensional contenida en las sentencias de condena invocadas como título ejecutivo y, por tanto, ostenta la condición de acreedor de las diferencias pensionales cobradas y la UGPP la calidad de deudora.

También se desestimaré el reparo consistente en que el juicio ejecutivo no es el escenario apropiado para controvertir la fórmula utilizada por la UGPP para liquidar los aportes al

sistema de pensiones a cargo del trabajador, porque el cálculo de tales cotizaciones debe sujetarse a las pautas dadas en las sentencias objeto de ejecución, es decir, que las sumas dejadas de descontar por tal concepto se actualizarían desde cuando se hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria, aplicando la fórmula de indexación explicada en la parte resolutive de la providencia de primera instancia, modificada en segunda instancia únicamente en cuanto a la fecha a partir de la cual se surtirían los efectos fiscales de la reliquidación pensional, de modo que es un desatino alegar que el actor debe adelantar un nuevo proceso ordinario para determinar cuál de las dos fórmulas debe aplicarse para estimar los consabidos aportes, pues en ese aspecto las sentencias son expresas y claras.

En este orden, no habría lugar a reponer la decisión impugnada, adiada el 12 de agosto de 2020 y, por consiguiente, en principio, se proseguirá con el trámite procesal subsiguiente.

Ahora, como la parte demandada interpuso subsidiariamente el recurso de apelación contra el mandamiento ejecutivo, el juzgado considera que no es procedente su concesión, si se observa que el artículo 243 del CGP admite la alzada sólo contra el auto que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago, que no es el caso en el presente asunto porque el proveído atacado libró la orden ejecutiva deprecada, previsión legal ratificada por el artículo 438 del CGP al disponer que el mandamiento ejecutivo no es apelable y que el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, si lo será.

La Corte Constitucional, al estudiar la reforma al Código de Procedimiento Civil efectuada por la Ley 794 de 2003, en cuanto a la eliminación del recurso de apelación contra el mandamiento ejecutivo, en sentencia C-1193/05, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, expuso:

*"La decisión del legislador de establecer la posibilidad de impugnar el mandamiento de pago solamente mediante el recurso de reposición, es decir, suprimiendo respecto de esa providencia el recurso de apelación que antes existía, ha de entenderse como una decisión de política legislativa dentro del propósito de descongestionar la administración de justicia, pues es evidente que de esa manera el proceso de ejecución en su fase inicial que comienza justamente con la intimación al deudor para el pago de la obligación, no llegará al juzgador de segunda instancia, con lo cual no sólo se aplica el principio de la celeridad, sino también se permite la agilización de otros procesos al suprimir un trámite no indispensable.*

*Se observa por la Corte que al demandado en el proceso ejecutivo no se le desconoce ni disminuye el derecho de defensa, por la circunstancia de haber previsto el legislador que los hechos constitutivos de excepciones previas solo puedan ser alegados mediante la interposición del recurso de reposición. En definitiva, lo que esto significa, es que ellas no serán tramitadas como un incidente de previo y especial pronunciamiento, en el que, además, la providencia que lo resolvía era susceptible de impugnación con el recurso de apelación. De esta suerte, si los hechos constitutivos de excepciones previas de todas maneras pueden ser alegados, resulta evidente que no le asiste la razón a la actora sobre la supuesta violación del derecho de defensa como sucedería si se le impidiera por completo su alegación.*

*Finalmente, en relación con la posible vulneración del derecho a la igualdad, planteada por la ciudadana demandante al considerar que la posición del demandado en un proceso ejecutivo, frente a la posición de éste en un proceso ordinario, es menos ventajosa, la Sala considera que estas actuaciones no pueden ser comparadas, pues no sólo la naturaleza de las dos especies de procesos es diferente, como quiera que en un proceso de conocimiento se busca la certeza del derecho incierto en tanto que el ejecutivo se persigue la realización coactiva de un derecho cierto al menos en apariencia, pero insatisfecho, sino que, además, precisamente por esa diferencia no puede aducirse quebranto alguno a la igualdad por establecer regulaciones distintas, como lo pretende la actora".*

Así las cosas, se negará la concesión del recurso de apelación que en subsidio formuló la parte ejecutada contra el auto que libró el mandamiento ejecutivo, por no estar autorizado taxativamente en las normas general ni especial del CGP que regulan la materia, pues se memora que tratándose de medios de impugnación se aplica el principio de especificidad, según el cual sólo es viable su interposición contra las providencias expresamente enlistadas en la ley, de suerte que en este tema está proscrita la analogía.


En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada contra el auto interlocutorio No. 582 del 12 de agosto de 2020, mediante el cual se libró mandamiento de pago en contra de la UGPP y a favor del ejecutante y, en consecuencia, NO REPONER el proveído impugnado.

2. NEGAR la concesión del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto interlocutorio No. 582 del 12 de agosto de 2020, mediante el cual se libró mandamiento ejecutivo.

3. RECONOCER a la Dra. Laura Natalí Feo Peláez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.451.137 y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 318.520 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustituta de la Unidad Administrativa Especial del Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en los términos y para los fines conferidos en el poder de sustitución y de acuerdo con los anexos obrantes a folios 104 a 112 del expediente.

NOTIFÍQUESE



**HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ**  
Juez

JCRC